



Asamblea General

Distr. general
29 de mayo de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87º período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020

Opinión núm. 15/2020, relativa a Phan Kim Khanh (Viet Nam)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 5 de noviembre de 2019 al Gobierno de Viet Nam una comunicación relativa a Phan Kim Khanh. El Gobierno respondió a la comunicación el 5 de febrero de 2020. Viet Nam es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
 - d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);
 - e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole,



género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Phan Kim Khanh es un vietnamita de 26 años. Es estudiante y bloguero. Normalmente reside en la provincia de Phu Tho (Viet Nam).

5. Antes de su detención, el Sr. Phan estudiaba en la Universidad de Thái Nguyên, donde participaba activamente en la vida estudiantil, a través de la asociación de estudiantes de la universidad, entre otros. También trabajaba como jefe del departamento de marketing de OTVINA Software, una empresa de *software* de Thái Nguyên. Según la fuente, el Sr. Phan publicaba artículos y noticias en los medios sociales para denunciar la corrupción y defender la democracia, la despolitización militar, las elecciones libres y la libertad de prensa. El Sr. Phan no tenía antecedentes penales.

Detención, prisión preventiva y actuaciones judiciales

6. El 21 de marzo de 2017, representantes del Organismo de Seguridad e Investigación de la Policía Provincial de Thái Nguyên se presentaron en el lugar de trabajo del Sr. Phan —presuntamente a raíz de una denuncia que recibieron— y registraron su despacho y su ordenador portátil, y se incautaron de varios documentos y objetos personales. Ese mismo día, los investigadores registraron también el domicilio del Sr. Phan, donde confiscaron artículos personales, cartas y otros documentos. El examen del ordenador portátil del Sr. Phan puso de manifiesto que este había ayudado a administrar 2 sitios web, 2 cuentas de Facebook, 3 páginas de Facebook, 2 cuentas de YouTube y 5 cuentas de correo electrónico. El Organismo de Seguridad e Investigación determinó que esas cuentas contenían artículos, comentarios, imágenes y vídeos que constituían “propaganda contra la República Socialista de Viet Nam”. La mayoría de las cuentas ya no son públicas y no pueden localizarse, con la excepción del sitio web Corruption Report, que parece ser un blog profesional o semiprofesional donde se publican artículos sobre política, economía y medio ambiente.

7. También el 21 de marzo de 2017, el Sr. Phan fue detenido en su despacho. La fuente afirma que nunca se presentó un mandamiento de registro al Sr. Phan, que tampoco fue informado de los cargos que se le imputaban. Tras su detención, su familia recibió una copia de una orden de detención urgente contra el Sr. Phan. El 22 de marzo de 2017, el Sr. Phan fue acusado formalmente de haber infringido el artículo 88 a) y c) del Código Penal de Viet Nam de 1999, que prohíbe la propaganda contra el Gobierno, la distorsión de información relativa al Gobierno o la difamación del Gobierno, así como la producción, el almacenamiento o la distribución de documentos con contenidos contrarios al Gobierno.

8. El 28 de marzo de 2017, el Organismo de Seguridad e Investigación, por medio de la Decisión núm. 3, pidió al Ministerio de Información y Comunicaciones que evaluara el contenido de 11 artículos que se habían encontrado en el ordenador del Sr. Phan, a fin de detectar “indicios de propaganda contra el Gobierno” y de utilización de un “lenguaje ofensivo y difamatorio hacia los dirigentes del partido y del Gobierno”. El 22 de mayo de 2017, el Ministerio dio a conocer los resultados de su evaluación y afirmó que los 11 artículos contenían propaganda contra el Gobierno, aunque solo pudo atribuir al Sr. Phan la autoría de un artículo.

9. El Sr. Phan permaneció siete meses en detención preventiva antes de su juicio, que tuvo lugar el 25 de octubre de 2017. La fuente alega que el tribunal nunca celebró una audiencia de libertad bajo fianza ni decidió que el Sr. Phan debía permanecer en prisión. Alega también que el Sr. Phan no fue llevado ante un juez hasta el momento del juicio. Al Sr. Phan se le mantuvo incomunicado durante la mayor parte de la detención preventiva. No se le permitió ver a sus familiares hasta el día del juicio ni hablar con su abogado hasta el 20 de septiembre de 2017. Hasta entonces, el Organismo de Seguridad e Investigación se había negado a conceder el certificado de abogado defensor al abogado del Sr. Phan.

10. El 10 de abril de 2017, el abogado del Sr. Phan recibió un documento que supuestamente había escrito el Sr. Phan en el que “confesaba” los delitos y rechazaba la asistencia del abogado defensor. Sin embargo, parece ser que la policía amenazó al Sr. Phan durante su reclusión y le aconsejó que se declarara culpable a fin de conseguir una reducción de la pena. Según la fuente, el abogado del Sr. Phan no pudo hablar con su cliente antes de que confesara ni en los meses posteriores. Más tarde, el Sr. Phan se quejó de que había sido amenazado verbalmente por la policía. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado que en Viet Nam es habitual que la policía se invente las confesiones o las obtenga por medios coercitivos. El 4 de mayo de 2017, el medio informativo gubernamental informó de que el Sr. Phan había “reconocido haber llevado a cabo actividades contra la República Socialista de Viet Nam” y comunicó que los sitios web que el Sr. Phan había creado estaban gestionados por “organizaciones terroristas y algunas organizaciones reaccionarias extranjeras”. Seis meses después de la detención del Sr. Phan, se le permitió hablar con su abogado en la cárcel, pero todas las conversaciones estaban limitadas a una hora de duración y eran supervisadas por la policía.

11. El 28 de agosto de 2017, más de cinco meses después de la detención del Sr. Phan, el fiscal elaboró un informe relativo a la sentencia, en el que recomendó que se presentaran cargos en virtud del artículo 88 del Código Penal. El 25 de octubre de 2017, el Sr. Phan fue juzgado en el Tribunal Popular de la provincia de Thái Nguyên y, tras una audiencia de tan solo cuatro horas de duración, fue condenado por realizar actividades de propaganda contra el Gobierno en virtud del artículo 88 del Código Penal. En el juicio, solo se permitió la asistencia de un miembro de la familia del Sr. Phan y se impidió la entrada de los demás familiares. La fuente alega que en el juicio se impusieron medidas estrictas de seguridad para impedir la asistencia de activistas y de familiares y amigos del Sr. Phan. Las pruebas citadas por el tribunal para fundamentar la condena del Sr. Phan incluían los sitios web, los artículos y las publicaciones en los medios sociales que se habían encontrado en su ordenador. El tribunal también mencionó las comunicaciones en línea que el Sr. Phan había mantenido con otros blogueros políticos que estaban encarcelados por publicar “propaganda”, así como con miembros de Việt Tân, una organización a favor de la democracia con sede en los Estados Unidos de América. Según la fuente, el Sr. Phan admitió ante el tribunal que dirigía los blogs, pero dijo que su principal propósito era combatir la corrupción. En su sentencia, el tribunal sostuvo, entre otras cosas, que el Sr. Phan se había inscrito en un programa de formación en línea sobre “los medios de comunicación de izquierdas” y la “resistencia no violenta”, con objeto de “adquirir experiencia en la elaboración de propaganda contra el Gobierno a través de los medios de comunicación”.

12. Al término del juicio, que duró cuatro horas, el Sr. Phan fue condenado y sentenciado a una pena de prisión de entre seis y siete años y a una pena de arresto domiciliario de entre tres y cuatro años. Después, fue encarcelado nuevamente en la prisión de Thái Nguyên y no se le permitió tener ningún contacto con su abogado o su familia. El 10 de enero de 2018, fue trasladado a una cárcel de la provincia de Ha Nam, pero sus familiares no se enteraron del traslado hasta que recibieron una carta suya.

13. Unos días después de ser condenado, el Sr. Phan trató de interponer un recurso de apelación contra su condena, pero los funcionarios de la prisión se negaron a presentar su recurso. En febrero de 2019, el Sr. Phan presentó una queja sobre el motivo por el que las autoridades no habían presentado su recurso. Desde entonces, las autoridades penitenciarias lo maltratan y amenazan con ponerlo en régimen de aislamiento o con no entregarle provisiones si no deja de intentar impugnar su condena. La salud del Sr. Phan ha empeorado y se teme por su vida.

Análisis de las vulneraciones cometidas

14. La fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Phan es arbitraria y se inscribe en las categorías I, II y III.

Categoría I

15. De conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales. En el artículo 9, párrafo 4, del Pacto se reitera la obligación de celebrar una audiencia de *habeas corpus* “a la brevedad posible”. La reclusión en régimen de incomunicación vulnera en esencia el artículo 9, párrafo 3, del Pacto¹. En el principio 15 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión también se recoge la prohibición de la reclusión en régimen de incomunicación.

16. El Sr. Phan fue detenido el 21 de marzo de 2017 y no fue llevado ante un juez para que verificara la legalidad de su detención. La acusación contra el Sr. Phan no se formuló hasta el 28 de agosto de 2017, y el tribunal no celebró ninguna audiencia ni realizó una evaluación individualizada en relación con su detención o el mantenimiento de la detención preventiva. La primera vez que el Sr. Phan pasó a disposición judicial fue cuando se juzgó su caso en cuanto al fondo el 25 de octubre de 2017, siete meses y cuatro días después de su detención. Al Sr. Phan se le mantuvo incomunicado durante los seis primeros meses de su detención y no se le permitió recibir la visita de ningún familiar durante su reclusión. No le dejaron ver a su abogado hasta el 20 de septiembre de 2017, un mes antes del juicio. En consecuencia, no existía ningún fundamento jurídico para la detención del Sr. Phan, ya que permaneció recluso sin acceso al mundo exterior durante más de seis meses y en ningún momento se le brindó la posibilidad de impugnar la legalidad de su detención y privación de libertad.

17. El artículo 11, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 15, párrafo 1, del Pacto garantizan a las personas el derecho a saber qué dice la ley y cuáles son las conductas que la vulneran. Todas las razones sustantivas para la detención o la reclusión deberán estar prescritas por la ley y definidas con suficiente precisión a fin de evitar una interpretación o aplicación excesivamente amplias o arbitrarias². El artículo 88 del Código Penal de 1999 define el delito de “realizar actividades de propaganda” de manera tan imprecisa que resulta imposible prever razonablemente qué conducta se considera delictiva.

Categoría II

18. La privación de libertad del Sr. Phan es el resultado del ejercicio de la libertad de opinión, expresión y asociación que se garantiza tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en el Pacto. Además, ninguna de las restricciones enumeradas en los artículos 19, párrafo 3, y 22, párrafo 2, del Pacto son aplicables en el presente caso.

19. Las autoridades detuvieron al Sr. Phan como resultado directo de su discurso en su calidad de periodista ciudadano. El cargo de “realizar actividades de propaganda” previsto en el artículo 88 del Código Penal contraviene la libertad de expresión personal, ya que penaliza vagamente un amplio espectro de actos de expresión y difusión de información. Independientemente de la veracidad de los hechos alegados, las autoridades han privado al Sr. Phan de su libertad en virtud de una ley que es, en sí misma, incompatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto.

20. En concreto, el Sr. Phan fue objeto de persecución por informar de manera independiente, y su detención vulnera su derecho a la libertad de expresión, tanto *de iure* como *de facto*. El Sr. Phan publicaba artículos en blogs y páginas de los medios sociales para informar de casos de corrupción y defendía una democracia plural, la despolitización militar, las elecciones libres y la libertad de prensa. Muchos de los documentos presentados en el juicio eran escritos que el Sr. Phan había reunido y publicado en cuanto que periodista ciudadano a fin de darlos a conocer a otras personas. Su detención, su condena y la larga pena que se le impuso fueron un intento del Gobierno de silenciarlo y castigarlo por haber

¹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, párr. 35.

² *Ibid.*, párr. 22.

compartido información a favor de la democracia y en contra de la corrupción en calidad de reportero independiente. La detención del Sr. Phan por expresar opiniones críticas también se ajusta a la práctica bien documentada del Gobierno de silenciar a los periodistas mediante la detención arbitraria.

21. En contravención de las normas internacionales, las autoridades han criminalizado y encarcelado a personas por asociarse con otros periodistas y organizaciones políticas, como demuestra la manera en que se han tratado las comunicaciones del Sr. Phan con blogueros y con miembros de Việt Tân. En su sentencia, el tribunal declaró que el Sr. Phan “se había puesto en contacto con algunos miembros de ‘Việt Tân’, una organización, con sede en el extranjero, que tiene por objeto abolir el Partido Comunista y el socialismo en Viet Nam”. Pese a que el Sr. Phan tiene derecho a asociarse con los grupos políticos de su elección y a expresar sus opiniones políticas a través de esas organizaciones, el Gobierno lo ha castigado por su relación con grupos críticos con el Gobierno. Las autoridades han vulnerado el derecho del Sr. Phan a la libertad de asociación, en contravención de lo dispuesto en el artículo 20, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 22, párrafo 1, del Pacto y el artículo 25 de la Constitución de Viet Nam.

22. La restricción de la libertad de expresión y asociación del Sr. Phan por parte del Gobierno no tenía una finalidad aceptable. Si bien el Gobierno afirmó que el Sr. Phan había sido detenido por “realizar actividades de propaganda”, ninguno de los informes o publicaciones en línea del Sr. Phan incitaba directa o indirectamente a la violencia ni podía considerarse razonablemente una amenaza para la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos o la reputación de terceros. Más bien, las autoridades utilizaron el pretexto de las “actividades de propaganda” para silenciar las críticas, lo cual no es una finalidad aceptable de conformidad con el artículo 19, párrafo 3, del Pacto. Al contrario, el pensamiento político, el periodismo y la discusión sobre derechos humanos son formas de expresión explícitamente protegidas³.

Categoría III

23. Durante los más de siete meses transcurridos entre su detención el 21 de marzo de 2017 hasta su juicio el 25 de octubre de 2017, el Sr. Phan no fue llevado ni una sola vez ante un juez para que este decidiera sobre la legalidad de su detención. A pesar de que el Ministerio de Información y Comunicaciones no dio a conocer el resultado de su evaluación acerca de si las publicaciones constituían propaganda hasta el 22 de mayo de 2017 y de que no se presentaron acusaciones formales hasta el 28 de agosto de 2017, el Sr. Phan estuvo recluso todo ese tiempo sin acceso a su familia o a un abogado. No se celebró ninguna audiencia de libertad bajo fianza ni se dieron a conocer públicamente las conclusiones de la evaluación individualizada sobre las razones que justificaban esa detención preventiva prolongada. La detención preventiva del Sr. Phan no fue autorizada en ningún momento por un funcionario judicial. Al negarse a llevar sin demora al Sr. Phan ante un juez y al denegarle la libertad provisional, las autoridades vulneraron el artículo 9, párrafos 3 y 4, del Pacto y los principios 11, 32 y 37 a 39 del Conjunto de Principios.

24. El Sr. Phan permaneció incomunicado durante más de seis meses después de su detención, que había tenido lugar en marzo de 2017. Su abogado no consiguió verle hasta un mes antes del juicio, y a su familia se le prohibió reunirse con él durante la detención preventiva. Las autoridades vulneraron el derecho del Sr. Phan a recibir visitas de su familia y a comunicarse con el mundo exterior, contraviniendo así el principio 19 del Conjunto de Principios y las reglas 43, 58 y 106 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

25. Además, transcurrieron más de siete meses hasta que el Sr. Phan fue juzgado. Durante ese tiempo, estuvo recluso en el centro de detención de la Policía Provincial de Thái Nguyên. Las autoridades no explicaron la demora en el caso del Sr. Phan, ni tampoco parece haber ninguna circunstancia que la justificara. El hecho de que al Sr. Phan no se le concediera la posibilidad de una audiencia de libertad bajo fianza y tuviera que permanecer

³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011) sobre la libertad de opinión y la libertad de expresión, párr. 11.

recluido durante siete meses antes de su juicio ponía de relieve la necesidad de que fuera juzgado sin dilaciones indebidas. Por ello, las autoridades vulneraron el artículo 14, párrafo 3 c), del Pacto, el principio 38 del Conjunto de Principios y el artículo 31 de la Constitución de Viet Nam.

26. El Sr. Phan también fue privado de su derecho a comunicarse con un abogado y a preparar su defensa. Tras su detención, permaneció seis meses en régimen de incomunicación, sin poder ponerse en contacto con su abogado o sus familiares. Durante los seis primeros meses de la detención preventiva, el Organismo de Seguridad e Investigación se negó a conceder al abogado del Sr. Phan un certificado de abogado defensor. El Sr. Phan no pudo comunicarse con su abogado ni preparar su defensa hasta un mes antes del juicio, cuando pudo reunirse por primera vez con su abogado el 20 de septiembre de 2017. Aunque el Gobierno afirma que el Sr. Phan se negó a recibir la asistencia de un abogado, el Sr. Phan no comunicó esta supuesta negativa directamente al abogado, sino que se hizo a través de comunicaciones enviadas desde el tribunal. Teniendo en cuenta que el Sr. Phan nunca informó públicamente de su deseo de no disponer de asistencia letrada ni comunicó esa decisión a su abogado, que hay denuncias verosímiles de que el Sr. Phan fue amenazado y obligado a confesar, y que en Viet Nam se da un patrón de privación de asistencia letrada a los acusados, es muy probable que la “negativa” del Sr. Phan a recibir servicios jurídicos fuera involuntaria o el resultado de una presión indebida. Las autoridades vulneraron el artículo 14, párrafo 3 b) y d), del Pacto, el principio 18 del Conjunto de Principios, la regla 119 de las Reglas Nelson Mandela y el artículo 31 de la Constitución de Viet Nam.

27. Además, todas las reuniones que el Sr. Phan tuvo con su abogado antes de la audiencia del juicio se celebraron en presencia de las autoridades penitenciarias y estuvieron limitadas a una hora de duración, sin que se explicara el motivo para ello. Las autoridades han vulnerado, y siguen vulnerando, el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto y el principio 18, párrafo 3, del Conjunto de Principios.

28. El Sr. Phan fue obligado a confesar que tenía blogs en los que se criticaba al Gobierno. Durante su reclusión, el Organismo de Seguridad e Investigación lo amenazó y le ofreció una reducción de la pena a cambio de que confesara; ambas cosas mermaron su capacidad de tomar decisiones. Las autoridades siguieron presionando al Sr. Phan, recluyéndolo en régimen de incomunicación durante seis meses, para que firmara una confesión. Además, el Gobierno dio a conocer ampliamente la “culpabilidad” del Sr. Phan antes de que este fuera condenado, ya que difundió su confesión en los medios de comunicación gubernamentales. Las autoridades vulneraron el artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto, el principio 21, párrafo 1, del Conjunto de Principios y el artículo 60, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal de Viet Nam, ya que amenazaron al Sr. Phan y lo obligaron a confesar. Al publicar una declaración de que el Sr. Phan se había confesado culpable, las autoridades dieron por sentado que era culpable antes del juicio, lo que vulneró el derecho a la presunción de inocencia que lo asiste en virtud del artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, párrafo 2, del Pacto, los principios 21, párrafo 1, y 36, párrafo 1, del Conjunto de Principios, el artículo 31, párrafo 1, de la Constitución de Viet Nam y el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal de Viet Nam.

29. El juicio del Sr. Phan no fue justo ni público, y no había ninguna razón legítima para considerar que debía celebrarse a puerta cerrada. Si bien el Sr. Phan tuvo la posibilidad de defenderse, el juicio fue de corta duración. El juicio, que culminó con una larga pena de seis años de prisión, duró tan solo cuatro horas, lo que indica que el tribunal no examinó debidamente todas las pruebas y que el juicio se utilizó para justificar legalmente la persecución del Sr. Phan por parte del Gobierno. Únicamente se permitió la presencia de un familiar en la sala y se denegó la entrada al resto de familiares. Si bien el artículo 14, párrafo 1, del Pacto contempla la celebración de un juicio a puerta cerrada, ningún elemento de la evaluación realizada por el tribunal de la conducta del Sr. Phan apuntaba a una amenaza para la moral, el orden público, la seguridad nacional, su vida privada o los intereses de la justicia. De hecho, en ningún momento el tribunal trató de justificar la celebración del juicio a puerta cerrada. Al impedir que el Sr. Phan expusiera sus argumentos en su integridad e impugnara las pruebas de la acusación, y al negarse a

celebrar un juicio público, las autoridades lo privaron de sus derechos a ser oído públicamente y con las debidas garantías y a impugnar las pruebas en su contra, en contravención de los artículos 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, párrafos 1 y 3 e), del Pacto y los artículos 31 y 103 de la Constitución de Viet Nam.

30. Además, el Sr. Phan presentó una petición formal para recurrir condena, pero los funcionarios del centro de detención no la transmitieron al tribunal de apelación y lo obligaron a abandonar el recurso. Ni el centro de detención ni el tribunal de apelación han acusado recibo de la petición del Sr. Phan, y se han negado a facilitar un acuse de recibo a sus familiares. El Sr. Phan ha sido amenazado con la reclusión en régimen de aislamiento si no cesa en sus intentos de recurrir la condena. Al denegar al Sr. Phan la posibilidad de someter su caso a un verdadero examen y de interponer un recurso motivado contra los cargos que se le imputaban, las autoridades vulneraron el artículo 14, párrafo 5, del Pacto.

31. La fuente concluye argumentando que el Sr. Phan fue sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes por las fuerzas del orden mientras se encontraba recluso antes y después del juicio. Antes del juicio, los interrogadores lo amenazaron para que confesara. Tras haber sido condenado, el Sr. Phan sigue siendo objeto de amenazas, abusos y malos tratos y su vida podría correr peligro.

Respuesta del Gobierno

32. El 5 de noviembre de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno con arreglo a su procedimiento ordinario de comunicación, pidiéndole que, a más tardar el 6 de enero de 2020, facilitara información detallada sobre la situación actual del Sr. Phan.

33. El 2 de enero de 2020 el Gobierno solicitó una prórroga del plazo para responder a la comunicación. Se concedió la prórroga y se fijó como nueva fecha el 6 de febrero de 2020.

34. En su respuesta de 5 de febrero de 2020, el Gobierno negó las alegaciones de la fuente y señaló que las autoridades habían detenido y juzgado al Sr. Phan respetando plenamente el procedimiento judicial previsto en la legislación vietnamita y en conformidad con los instrumentos internacionales en los que Viet Nam era parte.

35. El 25 de octubre de 2017, el Sr. Phan fue juzgado por el Tribunal Popular de la provincia de Thái Nguyên, que lo condenó a seis años de prisión por “realizar actividades de propaganda contra el Estado de Viet Nam”, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Penal. El 10 de enero de 2018, el Sr. Phan fue trasladado a la prisión de Nam Ha, en la provincia de Ha Nam, para cumplir su condena. Su estado de salud es bueno.

36. Desde 2013, el Sr. Phan utilizaba los medios sociales para comunicarse e intercambiar información con miembros de la organización terrorista Việt Tân, y había creado varios sitios web y editado y publicado directamente artículos, fotografías y videoclips que criticaban, distorsionaban y desacreditaban las leyes y políticas del Estado y que sembraban la confusión entre el público. Sus actividades en los medios sociales y en Internet difamaban a las instituciones públicas, desacreditaban a los dirigentes del Estado, daban una imagen equivocada del entorno socioeconómico y perturbaban la estabilidad social. Además, el Sr. Phan, en connivencia con otras personas, incitaba a derrocar al Gobierno y, en consecuencia, constituía una amenaza para la estabilidad social y la seguridad nacional. Durante el juicio, el Sr. Phan se declaró culpable del delito que se le imputaba con arreglo al artículo 88 del Código Penal.

37. El 21 de marzo de 2017, la Policía Provincial de Thái Nguyên ejecutó la orden de detención urgente núm. 1 contra el Sr. Phan por haber infringido el artículo 88, e informó de la detención a su familia y a la administración local en la que residía. La detención se llevó a cabo conforme a los pasos establecidos en la ley: a) se informó al Sr. Phan del cargo que se le imputaba y se le presentó una orden de detención, en presencia de miembros de la comunidad y la administración local; y b) todas las partes pertinentes, incluido el Sr. Phan, firmaron el acta de detención. El 22 de marzo de 2017, la policía inició las actuaciones

penales contra el Sr. Phan, formuló los cargos y ejecutó una orden de prisión preventiva en su contra. Los autos y las órdenes fueron aprobados por la Fiscalía Popular de la provincia de Thái Nguyên antes de ser ejecutados.

38. El Sr. Phan participó en la edición y publicación de documentos con la intención de derrocar al Estado, perturbar el orden social y distorsionar las políticas y leyes del Estado. La conducta del Sr. Phan no fue ilegal por que ejerciera su libertad de expresión, sino porque abusó de ese derecho. El Sr. Phan asistió a reuniones de Việt Tân y recibió apoyo financiero de su parte para llevar a cabo campañas de propaganda y desinformación contra el Estado. Việt Tân ha enviado personas y armas a Viet Nam para provocar disturbios públicos e incitar al odio. Recientemente, ha proseguido sus actividades contra el Estado, que incluyen resistirse a los agentes del orden público de guardia y destruir bienes. Esta conducta no puede justificarse como ejercicio de la libertad de asociación. En Viet Nam, no se detiene, procesa ni juzga a nadie por ejercer las libertades fundamentales. El Sr. Phan fue detenido y juzgado por haber quebrantado leyes nacionales.

39. La Constitución de Viet Nam protege los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa, el derecho de acceso a la información, el derecho de asociación y el derecho de manifestación. El Gobierno se refiere a las protecciones previstas en los artículos 14, párrafo 2, y 15, párrafo 4, de la Constitución. El artículo 88 del Código Penal no limita la libertad de expresión, pero tipifica como delito los intentos deliberados de engañar a la gente con información falsa, lo cual es compatible con los artículos 19, párrafo 3, 21 y 22, párrafo 2, del Pacto.

40. El Sr. Phan no fue objeto de detención en régimen de incomunicación o de tortura o tratos severos ni fue obligado a confesar. Durante su prisión preventiva y su detención, el Sr. Phan tuvo derecho a las prestaciones prescritas en materia de alimentos, prendas de vestir y condiciones generales de vida. Como en el caso de los demás detenidos, se han garantizado sus derechos a recibir visitas de familiares, a realizar llamadas telefónicas y a recibir atención médica. Durante el tiempo que ha permanecido detenido y en prisión preventiva, no ha denunciado ninguna vulneración de sus derechos.

41. De conformidad con el artículo 22, párrafo 4, de la Ley de Detención Provisional y Preventiva de 2015, las autoridades pueden impedir las visitas de familiares de personas en prisión preventiva si consideran que dichas visitas pueden perjudicar la resolución de una causa penal. La familia del Sr. Phan fue informada de ello sin demora. También fue informada del traslado del Sr. Phan a la prisión de Nam Ha y, desde entonces, ha podido visitarlo. El Sr. Phan ha recibido visitas de familiares en 17 ocasiones, ha enviado seis cartas y ha llamado a su familia por teléfono cada mes.

42. Se respetó el derecho del Sr. Phan a asistencia letrada. Durante los interrogatorios del 24 de marzo de 2017, el Sr. Phan declaró que “por el momento, no necesitaba un abogado defensor”. El Sr. Phan firmó el acta de los interrogatorios. El 7 de abril de 2017, escribió una carta al Organismo de Seguridad e Investigación Policial en la que expresaba su “negativa a contratar un abogado defensor”. De conformidad con las leyes que rigen los procedimientos penales y con la propia solicitud del Sr. Phan, el Organismo no autorizó la participación de abogados defensores en los procedimientos.

43. El 30 de agosto de 2017, tras recibir una solicitud de asistencia letrada por parte de los familiares del Sr. Phan y de un bufete de abogados local, el Tribunal Popular de la provincia de Thái Nguyên autorizó a ese bufete de abogados para defender al Sr. Phan. De conformidad con el reglamento sobre el acceso de las personas en prisión preventiva a la asistencia letrada, estas personas pueden reunirse ilimitadamente con un abogado siempre que cada reunión no exceda de una hora y se celebre bajo vigilancia, a fin de evitar la fuga de los detenidos y la transferencia de objetos prohibidos. Sin embargo, el contenido de las conversaciones entre el detenido y el abogado es confidencial, en consonancia con el artículo 14 del Pacto.

44. El juicio celebrado el 25 de octubre de 2017 respetó las debidas garantías procesales. El fallo y la condena se basaron en las pruebas, los interrogatorios y las alegaciones orales ante el tribunal. Estuvieron presentes en el juicio abogados, testigos, un miembro de la familia del Sr. Phan y otras partes pertinentes. El Sr. Phan tenía derecho a recurrir en los

15 días siguientes al juicio, pero no lo hizo. La alegación de que el Sr. Phan fue amenazado y tratado con dureza antes y después de ser condenado no es exacta.

Comentarios adicionales de la fuente

45. En relación con la afirmación del Gobierno de que en Viet Nam no se detiene, procesa ni juzga a nadie por ejercer las libertades fundamentales, el Grupo de Trabajo ha documentado en opiniones anteriores la represión de que son objeto los activistas y blogueros en línea que muestran su desacuerdo con las autoridades.

46. El Gobierno no ha demostrado que haya cumplido lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto. Tampoco ha refutado la alegación de que se mantuvo al Sr. Phan incomunicado durante los seis primeros meses de su detención y después del juicio, incluso cuando intentaba presentar un recurso. La explicación proporcionada para justificar la restricción de las visitas familiares no concuerda con la supuesta confesión del Sr. Phan ni con su supuesta negativa a contratar a un abogado. Además, el Gobierno no ha respondido a la afirmación de que el artículo 88 del Código Penal está redactado de manera poco precisa y no ha presentado ninguna prueba de que la conducta del Sr. Phan se enmarcara en las excepciones relativas al orden público previstas en el Pacto.

47. El Sr. Phan fue obligado a confesar. En particular, el Gobierno no facilitó las actas del interrogatorio realizado el 24 de marzo de 2017. El Gobierno afirma que el Sr. Phan rechazó la asistencia letrada tres días después de su detención, pero no explica por qué no se le proporcionó un abogado inmediatamente después de la detención. Además, el Gobierno vulneró el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones con el abogado, ya que toda vigilancia de las reuniones entre un detenido y su abogado es contraria al artículo 14 del Pacto. El Gobierno tampoco ha respondido a otras alegaciones formuladas en el marco de la categoría III.

Deliberaciones

48. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información recibida.

49. Para pronunciarse sobre si la detención del Sr. Phan es arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia para proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración del derecho internacional constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. La mera afirmación de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68)⁴.

50. La fuente indica que, el 21 de marzo de 2017, el Organismo de Seguridad e Investigación Policial de Thái Nguyên se presentó en el lugar de trabajo del Sr. Phan, registró su despacho y se incautó de varios documentos. Según la fuente, los investigadores también registraron el domicilio del Sr. Phan, donde confiscaron artículos personales y otros documentos. Ese mismo día, el Sr. Phan fue detenido en su despacho. La fuente afirma que nunca se mostró un mandamiento de registro al Sr. Phan y que su familia recibió una copia de una orden de detención urgente después de que fuera detenido. En su respuesta, el Gobierno indica que, el 21 de marzo de 2017, la Policía Provincial de Thái Nguyên ejecutó la orden de detención urgente núm. 1 contra el Sr. Phan e informó de la detención a su familia y a la administración local en la que residía. Se informó al Sr. Phan del cargo que se le imputaba y se le explicó la orden de detención, en presencia de miembros de la administración local. Todas las partes pertinentes, incluido el Sr. Phan,

⁴ El Gobierno adjuntó a su respuesta diez documentos en vietnamita, que no es uno de los tres idiomas de trabajo del Grupo de Trabajo. Se pidió al Gobierno que tradujera los anexos al inglés. El 5 de febrero de 2020, el Gobierno proporcionó la siguiente lista de documentos en inglés, pero no tradujo su contenido: i) orden de detención de urgente; (ii) acta de la detención; iii) aviso de detención urgente; iv) decisión relativa a la prisión preventiva; v) decisión relativa a las actuaciones penales; vi) decisión relativa a las acusaciones penales; vii) orden de prisión preventiva; viii) aviso de actuaciones penales y prisión preventiva; ix) negativa a contratar a un abogado defensor; y x) decisión relativa a las sanciones por las acusaciones penales.

firmaron el acta de detención. La orden fue aprobada por la Fiscalía Popular de la provincia de Thái Nguyên antes de ser ejecutada.

51. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha ofrecido indicios razonables de que las autoridades detuvieron al Sr. Phan sin presentar una orden de detención. Esa alegación no ha sido refutada por el Gobierno. Este no ha ofrecido ninguna explicación al Grupo de Trabajo sobre la naturaleza y el contenido de una orden de detención de urgente ni sobre las circunstancias de su ejecución. Tampoco ha explicado el contenido de las actas de la detención. Además, en varios casos recientes, el Grupo de Trabajo ha constatado que no se presentó una orden de detención en el momento de la detención, lo que sugiere que las afirmaciones de la fuente son creíbles⁵.

52. El Gobierno no se ha referido a las alegaciones de la fuente de que no se presentó ningún mandamiento de registro al Sr. Phan, a pesar de que su despacho y su domicilio fueron registrados y varios artículos fueron confiscados. El Grupo de Trabajo ha determinado que la detención es arbitraria cuando las pruebas obtenidas sin un mandamiento de registro se utilizan en procedimientos judiciales⁶. La fuente alega, sin que el Gobierno lo niegue, que las pruebas citadas por el tribunal para fundamentar la condena del Sr. Phan incluían artículos, publicaciones en medios sociales y comunicaciones con otros blogueros y miembros de Việt Tân que se habían encontrado en su ordenador. Esas pruebas no deberían haberse utilizado contra el Sr. Phan porque se obtuvieron indebidamente, sin un mandamiento de registro, y no pueden servir para fundamentar jurídicamente la decisión de detenerlo. Según el artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. El Sr. Phan fue detenido sin que mediara una orden de detención⁷ y sus pertenencias fueron confiscadas sin un mandamiento de registro. Se vulneró su derecho a no ser sometido a detención y reclusión arbitrarias, reconocido en el artículo 9, párrafo 1, del Pacto.

53. La fuente sostiene además que el Sr. Phan fue detenido el 21 de marzo de 2017 y no fue llevado ante un juez para que verificara la legalidad de su detención. La acusación contra el Sr. Phan no se formuló hasta el 28 de agosto de 2017, y el tribunal no realizó ninguna evaluación en relación con su detención. La primera vez que el Sr. Phan pasó a disposición judicial fue en el juicio, el 25 de octubre de 2017. En su respuesta, el Gobierno afirma que, el 22 de marzo de 2017, la Policía Provincial de Thái Nguyên ejecutó una orden de prisión preventiva contra el Sr. Phan, que había sido aprobada por la Fiscalía Popular.

54. De la respuesta del Gobierno se desprende claramente que el Sr. Phan no fue llevado sin demora ante una autoridad judicial para impugnar su detención. Si bien el Gobierno afirma que la orden de detención fue aprobada por la Fiscalía Popular, el Grupo de Trabajo ha dictaminado sistemáticamente que la Fiscalía no es una autoridad judicial independiente y no cumple los criterios del artículo 9 del Pacto⁸. El Sr. Phan permaneció recluido durante siete meses y cuatro días —desde el 21 de marzo de 2017 hasta el 25 de octubre de 2017, fecha en que se celebró su juicio— sin comparecer ante un tribunal. Según el Comité de Derechos Humanos, un plazo de 48 horas es normalmente suficiente para poner a alguien a disposición judicial, y todo plazo superior deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas⁹. El Gobierno no presentó esa justificación. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Phan no fue llevado sin demora ante una autoridad judicial, en violación del artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

⁵ Véanse las opiniones núms. 45/2019, párr. 50; 44/2019, párr. 51; 9/2019, párr. 29; 8/2019, párr. 49; 46/2018, párr. 48; 45/2018, párr. 40; 36/2018, párr. 39; 35/2018, párr. 26; y 75/2017, párr. 35.

⁶ Véanse las opiniones núms. 33/2019, 31/2019, 83/2018, 78/2018 y 36/2018. Véase también la opinión núm. 83/2019.

⁷ No basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo mediante una orden de detención: opiniones núms. 45/2019, párr. 51; 44/2019, párr. 52; 46/2018, párr. 48; y 36/2018, párrs. 39 y 40.

⁸ E/CN.4/1995/31/Add.4, párr. 57 c); opiniones núms. 45/2019, párr. 52; 44/2019, párr. 53; 46/2018, párr. 50; 35/2018, párr. 37; y 75/2017, párr. 48; y Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 32. Véanse también CCPR/C/VNM/CO/3, párr. 26; y CAT/C/VNM/CO/1, párrs. 24 y 25.

⁹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 33.

55. Además, la fuente alega que, tras su detención, el Sr. Phan permaneció más de seis meses incomunicado en el centro de detención de la Policía Provincial de Thái Nguyên. No se le permitió ver a sus familiares hasta el día del juicio ni hablar con su abogado hasta un mes antes del juicio. El Gobierno niega que el Sr. Phan estuviera en régimen de incomunicación, aunque solo menciona las visitas familiares que recibió el Sr. Phan después de ser condenado y posteriormente trasladado a la prisión de Nam Ha, el 10 de enero de 2018. El Gobierno también afirma que, inicialmente, el Sr. Phan rechazó la asistencia letrada y que, el 30 de agosto de 2017, el tribunal autorizó a su abogado para que lo representara legalmente, afirmación que se examina más adelante en la categoría III.

56. Según la información facilitada por ambas partes, el Sr. Phan no tuvo acceso a su familia antes del juicio y no se reunió con su abogado antes de finales de agosto de 2017. Por consiguiente, durante la detención preventiva, permaneció incomunicado durante un período de tiempo prolongado. Como han sostenido el Grupo de Trabajo y otros mecanismos de derechos humanos, la reclusión en régimen de incomunicación atenta contra el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal, reconocido en el artículo 9, párrafos 3¹⁰ y 4, del Pacto¹¹. La supervisión judicial de la detención es una salvaguardia fundamental de la libertad personal¹² y un elemento esencial para garantizar que la detención tenga fundamento jurídico. Puesto que el Sr. Phan no pudo impugnar su detención ante un tribunal, también se conculcó su derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2, párrafo 3, del Pacto. También fue sustraído del amparo de la ley, lo que supone una violación de su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 16 del Pacto.

57. Además, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, la prisión preventiva no debe ser la regla, sino la excepción, y debe ser ordenada por el menor tiempo posible¹³. Con arreglo al artículo 9, párrafo 3 del Pacto, la libertad se reconoce como principio y su privación, como excepción¹⁴. La reclusión previa al juicio debe basarse en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria para fines tales como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito¹⁵. En el presente caso, no parece haberse llevado a cabo una revisión judicial individualizada de la situación del Sr. Phan ni una evaluación de alternativas a la privación de libertad. Su detención preventiva no se constituyó ni revisó adecuadamente y, por lo tanto, carecía de fundamento jurídico.

58. El Grupo de Trabajo considera que los cargos por los que el Sr. Phan fue detenido y finalmente condenado son tan vagos que es imposible invocar un fundamento jurídico para su detención. El Sr. Phan fue condenado por “realizar actividades de propaganda contra el Estado”, con arreglo al artículo 88 del Código Penal. El Grupo de Trabajo ha planteado al Gobierno, en varias ocasiones, la cuestión del enjuiciamiento con arreglo a leyes penales vagas, indicando que el artículo 88 no cumple el principio de legalidad¹⁶. El principio de legalidad exige que las leyes se formulen con precisión suficiente para que las personas puedan acceder a la ley y comprenderla, y regular su conducta en consonancia con ella¹⁷. El

¹⁰ *Ibid.*, párr. 35.

¹¹ Opiniones núms. 45/2019, 44/2019, 9/2019, 35/2018, 46/2017, 45/2017.

¹² Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria acerca de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37), párr. 3; y CAT/C/VNM/CO/1, párr. 24.

¹³ A/HRC/19/57, secc. III.A.

¹⁴ *Ibid.*, párr. 54.

¹⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 38.

¹⁶ Opiniones núms. 45/2019, párr. 54; 9/2019, párr. 39; 46/2018, párr. 62; 36/2018, párr. 51; 35/2018, párr. 36; 79/2017, párr. 54; 40/2016, párr. 36; 45/2015, párr. 15; 20/2003, párr. 19; 13/1999, párr. 12; 27/1998, párr. 9; y 21/1997, párr. 6. En relación con el artículo 88 del Código Penal, véanse las opiniones núms. 44/2019, párr. 55; 8/2019, párr. 54; 75/2017, párr. 40; 27/2017, párr. 35; 26/2017, párr. 51; 26/2013, párr. 68; 27/2012, párr. 41; y 24/2011, párr. 24.

¹⁷ Opinión núm. 41/2017, párrs. 98 a 101. Véanse también opinión núm. 62/2018, párrs. 57 a 59; Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 22; y CCPR/C/VNM/CO/3, párrs. 45 y 46.

Sr. Phan no podía adivinar que publicar artículos sobre corrupción y democracia en los medios sociales y comunicarse con otros blogueros y organizaciones constituiría una conducta delictiva.

59. Por estas razones, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno no fundamentó debidamente en derecho la detención y privación de libertad del Sr. Phan. Así, pues, su detención es arbitraria y se inscribe en la categoría I.

60. Además, la fuente alega que se ha privado de libertad al Sr. Phan como resultado del ejercicio pacífico del derecho a la libertad de opinión y de expresión y a la libertad de asociación. El Gobierno sostiene que el Sr. Phan fue detenido y juzgado por infringir la legislación vietnamita, en particular el artículo 88 del Código Penal.

61. El artículo 88 castiga con una pena de 3 a 12 años de prisión a cualquier persona culpable de: a) hacer propaganda contra el Gobierno, distorsionar información relativa al Gobierno o difamar al Gobierno; b) propagar medios de guerra psicológica o divulgar noticias falsas para crear confusión entre la población; o c) producir, almacenar o distribuir documentos o productos culturales con contenidos contrarios al Estado.

62. El Grupo de Trabajo ha examinado la aplicación del artículo 88 en numerosas opiniones y ha determinado que las condenas impuestas con arreglo a esa disposición por ejercer pacíficamente los derechos no pueden considerarse compatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos ni con el Pacto¹⁸. Durante su visita a Viet Nam en octubre de 1994, el Grupo de Trabajo llegó a una conclusión similar, al observar que la definición vaga de los delitos contra la seguridad nacional no permite hacer una distinción entre los actos violentos que pueden constituir una amenaza para la seguridad nacional y el ejercicio pacífico de los derechos¹⁹.

63. En el presente caso, la fuente sostiene que el Sr. Phan fue objeto de persecución por informar de manera independiente, en calidad de bloguero. La condena era una sanción por haber compartido información a favor de la democracia y en contra de la corrupción. La detención del Sr. Phan por expresar opiniones críticas forma parte de la práctica bien documentada del Gobierno de silenciar a los periodistas mediante la detención arbitraria. El Gobierno también ha castigado al Sr. Phan por su comunicación y asociación con blogueros y miembros de Việt Tân que son críticos con el Gobierno.

64. El Gobierno se refiere a los actos delictivos presuntamente cometidos por el Sr. Phan desde 2013, entre ellos: a) utilizar los medios sociales para intercambiar información con miembros de Việt Tân; b) crear sitios web y publicar artículos, fotografías y videoclips que criticaban, distorsionaban y desacreditaban las leyes y políticas del Estado y sembraban la confusión entre el público; y c) difamar a las instituciones públicas, desacreditar a los dirigentes del Estado, dar una imagen equivocada del entorno socioeconómico y perturbar la estabilidad social. Además, el Sr. Phan, en connivencia con otras personas, incitaba a derrocar al Gobierno y, entre otras, había asistido a reuniones de Việt Tân, había estado en contacto con sus miembros y había recibido apoyo financiero de su parte.

65. El artículo 19, párrafo 2, del Pacto dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Este derecho también abarca el pensamiento político, los comentarios sobre los asuntos públicos, la discusión sobre derechos humanos y el periodismo²⁰. Protege la posesión y la expresión de opiniones, incluidas las que no son conformes con la política del Gobierno²¹.

¹⁸ Opiniones núms. 45/2019, 44/2019, 8/2019, 75/2017, 27/2017, 26/2017, 26/2013, 27/2012, 24/2011, 6/2010, 1/2009 y 1/2003; y A/HRC/41/7, párrs. 38.73, 38.171 y 38.188.

¹⁹ E/CN.4/1995/31/Add.4, párrs. 58 a 60. Véase también CCPR/C/VNM/CO/3, párr. 45 d).

²⁰ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 11.

²¹ Opiniones núms. 8/2019, párr. 55; y 79/2017, párr. 55.

66. El Grupo de Trabajo considera que la conducta del Sr. Phan se inscribe dentro del derecho a la libertad de opinión y de expresión, protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto. Asimismo, el Sr. Phan realizaba actividades de promoción relacionadas con la democracia y la lucha contra la corrupción en Viet Nam, y fue detenido por ejercer su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos en virtud del artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 a) del Pacto²². Además, el Sr. Phan fue condenado por haber ejercido su derecho a la libertad de asociación en virtud del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 22 del Pacto, porque se comunicaba con otros blogueros y con miembros de Việt Tân, una organización que realiza actividades pacíficas encaminadas a reforzar la democracia²³.

67. Nada indica que las restricciones de esos derechos autorizadas por los artículos 19, párrafo 3, 22, párrafo 2, y 25 del Pacto se apliquen en el presente caso. Si bien el Gobierno se refirió a los artículos 19, párrafo 3, y 22, párrafo 2, el Grupo de Trabajo no está convencido de que fuera necesario enjuiciar al Sr. Phan para proteger un interés legítimo en virtud de esos artículos ni de que la condena y la pena fueran una respuesta proporcionada a sus actividades pacíficas. Y, lo que es más importante, no hay prueba alguna que sugiera que los artículos del Sr. Phan, sus publicaciones en línea y sus comunicaciones con terceros incitaran directa o indirectamente a la violencia ni pudieran considerarse razonablemente una amenaza para la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos o la reputación de terceros. El Consejo de Derechos Humanos ha exhortado a los Estados a que se abstengan de imponer restricciones en virtud del artículo 19, párrafo 3, que no sean compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos²⁴. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

68. De acuerdo con la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y a señalar a la atención del público las cuestiones relativas a la observancia de los derechos humanos²⁵. La fuente ha demostrado que el Sr. Phan fue detenido por ejercer los derechos que le reconoce la Declaración para promover la democracia y combatir la corrupción. El Grupo de Trabajo ha determinado que la privación de libertad de personas en razón de sus actividades como defensoras de los derechos humanos vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley reconocido en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 26 del Pacto²⁶.

69. El Grupo de Trabajo concluye que la detención del Sr. Phan fue el resultado del ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de asociación, así como de su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, y contraviene el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 26 del Pacto. Así pues, su detención es arbitraria y se inscribe en la categoría II.

70. Habida cuenta de su conclusión de que la detención del Sr. Phan es arbitraria, por cuanto se inscribe en la categoría II, el Grupo de Trabajo recalca que el Sr. Phan no tendría que haber sido juzgado. Sin embargo, fue juzgado, condenado y sentenciado el 25 de

²² Los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate público. Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 25 (1996), sobre la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, párr. 8. Opiniones núms. 45/2019, 44/2019, 9/2019, 46/2018, 45/2018, 36/2018, 35/2018, 40/2016, 26/2013, 42/2012, 46/2011 y 13/2007.

²³ La afiliación a Việt Tân, por sí sola, no justifica la detención, opiniones núms. 45/2019, párr. 61; 75/2017, párr. 43; 27/2017, párr. 36; 40/2016, párr. 38; 26/2013, párr. 67; y 46/2011, párrs. 20 a 22.

²⁴ A/HRC/RES/12/16, párr. 5 p).

²⁵ Resolución 53/144 de la Asamblea General, anexo, arts. 1 y 6 c). Véase también la resolución 74/146 de la Asamblea General, párr. 12.

²⁶ Opiniones núms. 45/2019, 44/2019, 9/2019, 46/2018, 45/2018, 36/2018, 35/2018, 79/2017 y 75/2017.

octubre de 2017. La información presentada por la fuente pone de manifiesto una vulneración del derecho del Sr. Phan a un juicio imparcial durante el proceso.

71. La fuente alega que no se reconoció al Sr. Phan su derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, dado que transcurrieron más de siete meses entre su detención y el juicio. El carácter razonable de la dilación en llevar el caso a juicio debe evaluarse a la luz de las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta la complejidad de este, la conducta del imputado y la manera en que las autoridades hayan gestionado el asunto²⁷. La dilación en juzgar al Sr. Phan fue inaceptablemente larga, lo que contraviene el artículo 9, párrafo 3, y el artículo 14, párrafo 3 c), del Pacto. En el presente caso, la dilación se ve agravada por el hecho de que no se concedió al Sr. Phan la posibilidad de una audiencia de libertad bajo fianza y, como se ha señalado antes, al Grupo de Trabajo le resulta evidente que el Sr. Phan está privado de libertad únicamente por haber ejercido los derechos que le reconoce el derecho internacional de los derechos humanos, pero no debería estarlo²⁸.

72. Además, la fuente alega que el Sr. Phan fue privado de su derecho a comunicarse con su abogado y a preparar su defensa, dado que la primera vez que pudo reunirse con su abogado fue el 20 de septiembre de 2017, un mes antes del juicio. Durante los seis primeros meses de la detención, el Organismo de Seguridad e Investigación se negó a conceder al abogado del Sr. Phan un certificado de abogado defensor. La fuente alega que la negativa del Sr. Phan a recibir asistencia letrada fue involuntaria. Además, cuando se le permitió reunirse con su abogado, las entrevistas se limitaron a una hora de duración. El Gobierno afirma que, el 24 de marzo de 2017, el Sr. Phan rechazó la asistencia de un abogado durante el interrogatorio y que, el 7 de abril de 2017, escribió una carta a la policía en la que volvía a expresar su negativa a contratar a un abogado. Según el Gobierno, el 30 de agosto de 2017 el tribunal autorizó a un bufete de abogados para que representara al Sr. Phan. El Gobierno señala que el reglamento autoriza reuniones ilimitadas con un abogado siempre que cada reunión no exceda de una hora y se celebre bajo vigilancia, a fin de evitar la fuga de los detenidos y la transferencia de objetos prohibidos. Sin embargo, el contenido de las conversaciones es confidencial.

73. Habiendo examinado la información facilitada por ambas partes, el Grupo de Trabajo considera que la versión de los hechos presentada por la fuente es creíble. En dos casos recientes relacionados con Viet Nam, el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que negativas similares a contratar a un abogado eran inverosímiles²⁹. En términos más generales, el Grupo de Trabajo constató que se denegaba o limitaba el acceso a la representación letrada a las personas que enfrentaban acusaciones graves, lo que apunta a la existencia de un patrón sistémico de no facilitar el acceso a un abogado durante los procesos penales en Viet Nam³⁰.

74. Las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia jurídica de un abogado de su elección, en cualquier momento de su detención, en particular inmediatamente después de que se practique la detención, y el acceso a un abogado debe facilitarse sin demora³¹. La falta de asistencia jurídica desde el inicio de la detención y la posterior limitación de la duración de las entrevistas a una hora vulneraron los derechos del Sr. Phan a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, en virtud del artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto, y a defenderse por medio de un abogado de su elección, en virtud del artículo 14, párrafo 3 d). Las comunicaciones con el

²⁷ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 37; y observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 35.

²⁸ Opinión núm. 46/2019, párr. 63, en la que el Grupo de Trabajo no estaba convencido de que hubiera una vulneración con arreglo a la categoría II y no pudo concluir que los 16 meses transcurridos hasta el juicio fueran un plazo irrazonable.

²⁹ Opiniones núms. 44/2019, párr. 72; y 46/2018, párr. 64.

³⁰ Opiniones núms. 45/2019, 44/2019, 9/2019, 46/2018, 35/2018, 79/2017, 75/2017, 27/2017, 26/2017 y 40/2016.

³¹ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), principio 9 y directriz 8.

abogado se pueden celebrar a la vista de las autoridades a condición de que no puedan oírlos, y deben ser confidenciales³².

75. La fuente alega que las autoridades coaccionaron al Sr. Phan para que confesara que llevaba blogs en los que se criticaba al Gobierno, y que incluso lo amenazaron y le ofrecieron una reducción de la pena mientras estaba incomunicado. Según la fuente, el Gobierno también difundió ampliamente la confesión del Sr. Phan en los medios de comunicación gubernamentales, que informaron de que los sitios web creados por el Sr. Phan estaban gestionados por “organizaciones terroristas y algunas organizaciones reaccionarias extranjeras”. El Gobierno niega que se obligara a confesar al Sr. Phan, y señala que este firmó las actas del interrogatorio y que, en el juicio, se declaró culpable del delito que se le imputaba.

76. Recae sobre el Gobierno la carga de demostrar que el Sr. Phan confesó libremente y que no se ejerció presión física o psicológica directa o indirecta alguna sobre él por parte de las autoridades investigadoras³³, y no lo ha hecho. En consecuencia, el Grupo de Trabajo concluye que se vulneró el derecho del Sr. Phan a no ser obligado a confesarse culpable, garantizado por el artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto. Las confesiones hechas en ausencia de un abogado no pueden ser admitidas como prueba en un proceso penal³⁴. Además, al difundir la declaración en los medios de comunicación, las autoridades vulneraron el derecho del Sr. Phan a la presunción de inocencia que le asiste en virtud del artículo 14, párrafo 2, del Pacto³⁵.

77. Asimismo, la fuente alega que al Sr. Phan no se le permitió ser oído públicamente. El Gobierno afirma que estuvieron presentes en el juicio abogados, testigos, un miembro de la familia del Sr. Phan y otras partes pertinentes. Dado que las versiones de los hechos no coinciden, el Grupo de Trabajo no puede llegar a una conclusión sobre esta cuestión.

78. Además, el juicio del Sr. Phan duró solo cuatro horas. Incluso si fuera cierto que, como afirma el Gobierno, el Sr. Phan reconoció su culpabilidad, el juicio fue, ciertamente, breve. Tras el juicio, se le impuso una pena severa de seis años de prisión, así como un período de arresto domiciliario. Como ha señalado el Grupo de Trabajo³⁶, un juicio breve por un delito grave hace pensar que la culpabilidad del Sr. Phan se había determinado antes de la audiencia, lo cual constituye una nueva denegación del derecho del autor a la presunción de inocencia, amparado por el artículo 14, párrafo 2, del Pacto.

79. La fuente alega que el Sr. Phan presentó una petición para recurrir la condena, que no fue transmitida por las autoridades del centro de detención de Thái Nguyên al tribunal de apelación, y que el Sr. Phan ha sido amenazado con la reclusión en régimen de aislamiento si no cesa en sus intentos de recurrir. En su respuesta, el Gobierno afirma que el Sr. Phan tenía derecho a recurrir en los 15 días siguientes al juicio, pero no lo hizo. Niega que se amenazara al Sr. Phan, que no ha presentado ninguna denuncia. De la respuesta del Gobierno se desprende que, tras el juicio, el Sr. Phan solo tuvo acceso a su familia a partir del 10 de enero de 2018 y no durante el período de 15 días en los que podía recurrir. Ello hace pensar que el Sr. Phan no pudo contar con la asistencia de su familia ni de su abogado para asegurarse de que se había presentado el recurso. Además, habida cuenta de que el Sr. Phan había desplegado esfuerzos considerables para impugnar el caso instruido contra él durante el juicio, entre otras cosas contratando a un abogado y defendiéndose personalmente, el Grupo de Trabajo considera probable que el Sr. Phan hubiera intentado impugnar su condena y la larga pena que se le impuso. El Gobierno tiene la obligación de

³² *Ibid.*; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), regla 61, párr. 1; Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 18; y CCPR/C/VNM/CO/3, párr. 36.

³³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32, párr. 41; y opiniones núms. 32/2019, párr. 43; 14/2019, párr. 68; 53/2018, párr. 77 a); 52/2018, párr. 79 i); 17/2017, párr. 42; 10/2016, párr. 48; y 1/2016, párr. 40. Véase también A/56/156, párr. 39 j).

³⁴ Opiniones núms. 14/2019, párr. 71; 1/2014, párr. 22; y 40/2012, párr. 48; y E/CN.4/2003/68, párr. 26 e).

³⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32, párr. 30.

³⁶ Opiniones núms. 45/2019, 44/2019, 46/2018, 45/2018, 36/2018 y 75/2017.

velar por el respeto del derecho del Sr. Phan a que su condena y su pena sean revisadas por un tribunal superior, de conformidad con artículo 14, párrafo 5, del Pacto.

80. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha aportado indicios razonables de que el Sr. Phan ha sido objeto de malos tratos, en violación del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto y el artículo 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Gobierno niega que el Sr. Phan haya sido sometido a tortura o malos tratos, pero no proporciona más información al respecto. El Grupo de Trabajo remite este caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

81. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que las vulneraciones del derecho a un juicio imparcial son de tal gravedad que confieren a la detención del Sr. Phan un carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

82. Además, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Phan fue objeto de persecución por promover la democracia, las elecciones libres y la libertad de prensa, así como por intentar combatir la corrupción. Parece haber en Viet Nam una pauta de detención de defensores de los derechos humanos por la labor que realizan, y el presente caso es un ejemplo de ello³⁷. Además, en el análisis realizado antes en relación con la categoría II, el Grupo de Trabajo ha establecido que la detención del Sr. Phan fue el resultado del ejercicio pacífico de los derechos que lo asisten en virtud del derecho internacional. Cuando la detención obedece al ejercicio activo de derechos civiles y políticos, hay una fundada presunción de que la detención también constituye una vulneración del derecho internacional en razón de una discriminación basada en opiniones políticas o de otra índole³⁸.

83. El Sr. Phan fue privado de su libertad por motivos discriminatorios, debido a su condición de defensor de los derechos humanos, y por sus opiniones políticas o de otra índole. Su detención vulneró los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto, y es arbitraria con arreglo a la categoría V. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

84. Al Sr. Phan no se le permitió ponerse en contacto con su familia antes del juicio, lo que supone una vulneración de su derecho a mantener contacto con el mundo exterior según la regla 58, párrafo 1, de las Reglas Nelson Mandela y los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios. El Gobierno afirma que, con arreglo a la legislación vietnamita, se pueden denegar las visitas familiares a las personas en prisión preventiva si se considera que dichas visitas pueden perjudicar la resolución de una causa penal. Sin embargo, no ha explicado por qué las visitas tendrían un efecto negativo en el caso del Sr. Phan. Al negarle el acceso a su familia durante siete meses se incumplieron los requisitos de la regla 43, párrafo 3, de las Reglas Nelson Mandela, según la cual el contacto familiar solo podrá restringirse por un período limitado y en la estricta medida en que lo exija el mantenimiento de la seguridad y el orden.

85. Al Grupo de Trabajo le preocupa el estado de salud del Sr. Phan, que parece estar empeorando, y que su vida pueda correr peligro. Si bien el Gobierno asegura que el Sr. Phan goza de buena salud, el Grupo de Trabajo observa que, al parecer, es objeto de maltrato continuo y lleva más de tres años privado de libertad. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que libere de inmediato y sin condiciones al Sr. Phan y se asegure de que reciba atención médica.

86. Este es uno de los muchos casos que se han presentado al Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la detención arbitraria en Viet Nam³⁹. Los casos obedecen a una pauta habitual: una detención que no se ajusta a las normas internacionales; una prisión preventiva prolongada sin acceso a revisión judicial; la denegación del acceso a asistencia

³⁷ Opiniones núms. 45/2019, 44/2019, 9/2019, 46/2018, 45/2018, 36/2018, 35/2018, 79/2017, 75/2017 y 27/2017. Véase también CCPR/C/VNM/CO/3, párr. 25.

³⁸ Opiniones núms. 59/2019, párr. 79; 13/2018, párr. 34; y 88/2017, párr. 43.

³⁹ Opiniones núms. 45/2019, 44/2019, 9/2019, 8/2019, 46/2018, 45/2018, 36/2018, 35/2018, 79/2017, 75/2017, 27/2017, 26/2017, 40/2016, 46/2015 y 45/2015.

letrada; la detención en régimen de incomunicación; el enjuiciamiento por delitos formulados de forma imprecisa, por el ejercicio pacífico de los derechos humanos; un breve juicio a puerta cerrada, en el que no se observan las debidas garantías procesales; la imposición de penas desproporcionadas; y la denegación de acceso al mundo exterior. Esta pauta indica un problema sistémico con la detención arbitraria en Viet Nam que, de continuar, podría constituir una grave violación del derecho internacional⁴⁰.

87. El Grupo de Trabajo celebraría tener la oportunidad de cooperar de manera constructiva con el Gobierno para abordar la cuestión de la detención arbitraria. Ha transcurrido un tiempo considerable desde su última visita a Viet Nam, que tuvo lugar en octubre de 1994, y el Grupo de Trabajo estima que es el momento oportuno para visitar el país de nuevo. El 11 de junio de 2018, el Grupo de Trabajo reiteró una vez más su solicitud al Gobierno para realizar una visita al país, y seguirá esperando una respuesta positiva al respecto.

Decisión

88. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Phan Kim Khanh es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 3, 9, 14, 16, 19, 22, 25 a) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

89. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Viet Nam que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Phan sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

90. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, en particular el riesgo de que se produzca un daño a la salud del Sr. Phan, el remedio adecuado sería poner al Sr. Phan inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que plantea en los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte medidas urgentes para garantizar la liberación inmediata del Sr. Phan.

91. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Phan, incluidas las alegaciones de que ha sido objeto de amenazas y malos tratos, y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

92. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adapte sus leyes, en particular el artículo 88 del Código Penal (ahora, el artículo 117 del Código revisado), de manera que estén en consonancia con las recomendaciones formuladas en la presente opinión y con los compromisos contraídos por Viet Nam en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

93. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y al Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, para que tomen las medidas correspondientes.

94. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

⁴⁰ Opinión núm. 47/2012, párr. 22.

Procedimiento de seguimiento

95. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Phan y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Phan;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Phan y, de ser el así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Viet Nam con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

96. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

97. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

98. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁴¹.

[Aprobada el 1 de mayo de 2020]

⁴¹ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.